

Resumen

La alimentación de cualquier grupo humano pone en juego todas las instituciones sociales, porque implica la producción, distribución y consumo de bienes y símbolos que legitiman qué y por qué puede comer cada quién. En la Argentina (como en el mundo) la alimentación está en crisis no porque haya problemas en un área sino porque se presentan simultáneamente en todas ellas. Respecto de la producción estamos al borde de una crisis de sustentabilidad, respecto de la distribución enfrentamos una crisis de equidad y desde el punto de vista del consumo sufrimos silenciosamente una crisis de comensalidad.

La propuesta es abordar la problemática desde el concepto de Seguridad Alimentaria, (entendida como derecho de todas las personas a una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada), con criterio de largo plazo y tomando en cuenta toda la cadena; es decir, se deberían plantear procesos ecológicos, tecnológicos, económicos, nutricionales, sociales y culturales. Proponemos abordar la producción y sus vinculaciones entre población, tecnología y medio ambiente. La distribución analizando las relaciones sociales que producen y justifican el acceso diferencial a los alimentos, a mismo tiempo el consumo con los procesos culturales (de los que no está fuera la agroindustria y los medios masivos), legitimando qué corresponde comer a cada clase, género y edad.

El lugar del Estado en la determinación de este tipo de política alimentaria debe ser sumamente activo, la academia en tanto debe participar comprometidamente en la formación de sistemas expertos que fundamenten la regulación, para no dejar en manos del mercado la única lógica de la cadena. Actualmente la sociedad está en el medio de múltiples discursos (economicistas, salubristas, publicitarios, etc) en los que el mercado, a través de los medios masivos, tiene una voz dominante a la hora de marcar el consumo condicionando la demanda desde la oferta y la producción/distribución desde las relaciones de producción.

Para nuestra propuesta la premisa es que son los comensales (no el Estado o el mercado) el principio y el fin de toda política alimentaria. Por eso sostenemos la idea de que todos los patrones de consumo deben cambiar, el de los que no tienen (para que accedan a ese derecho conculcado) y también el de los que tienen (porque su consumo los conduce a enfermedades crónicas y degenerativas dependientes del estilo de vida). Sostendremos que la mejor política es la que favorece la autonomía de los comensales, es decir que tengan suficientes ingresos para comprar sus alimentos y la suficiente educación para elegir responsablemente.

Introducción

La alimentación de cualquier grupo humano pone en juego todas las instituciones sociales, porque implica la producción, distribución y consumo de bienes y símbolos que legitiman qué y por qué puede comer cada quién.

En la Argentina (como en el mundo) la alimentación está en crisis no porque haya problemas en un área sino porque se presentan en las tres esferas simultáneamente. Respecto de la producción estamos al borde de una crisis de sustentabilidad, respecto de la distribución enfrentamos una crisis de equidad y desde el punto de vista del consumo sufrimos silenciosamente una crisis de comensalidad.

Problemas complejos no podemos esperar que tengan soluciones simples, sin embargo eligiendo un marco teórico comprensivo y analizando cada componente podemos realizar un diagnóstico que nos ayude a proponer diferentes acciones en diferentes niveles.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

NIVEL MACROECONÓMICO

Disponibilidad

- Suficiencia
- Estabilidad
- Autonomía
- Sustentabilidad

Acceso

- | | | |
|----------------------|---|---------|
| - Precios | } | Mercado |
| - Ingresos | | |
| | | |
| - Políticas Públicas | } | Estado |
| | | |

NIVEL MICROSOCIAL

Estrategias de Consumo

Prácticas

- Diversificación de recursos
- Diversificación del abasto
- Manejo del tamaño familiar
- Autoexplotación

Representaciones

- Cuerpo
- Alimentos
- Comensalidad

La propuesta es abordar la problemática desde el concepto de Seguridad Alimentaria, entendida como derecho de todas las personas a una alimentación cultural y nutricional-mente adecuada. Se divide a los fines prácticos en dos niveles de análisis: la **seguridad alimentaria propiamente dicha**, de nivel macro, de las poblaciones y grupos que habitan naciones o regiones y **la seguridad alimentaria de los hogares**, en el nivel microsocioal

Luego de realizar un diagnóstico analizando cada componente estaremos en condiciones de realizar algunas propuestas, pero estas propuestas parten de la idea que para que exista una política alimentaria es preciso **tomar en cuenta toda la cadena**, es decir se deberán abordar procesos ecológicos, tecnológicos, económicos, nutricionales, sociales y culturales.

Proponemos abordar la **problemática de la producción** y las vinculaciones entre población, tecnología y medio ambiente. **La problemática de la distribución**

analizando las relaciones sociales que producen y justifican el acceso diferencial a los alimentos. Al mismo tiempo que **el consumo** con los procesos culturales (impactados por la agro-industria y los medios masivos) legitimando qué corresponde comer a cada clase, género y edad.

El **lugar del estado** en la determinación de este tipo de política alimentaria debe ser sumamente activo, **la academia** en tanto debe participar comprometidamente en la formación de “sistemas expertos” que fundamenten científicamente las regulaciones, para no dejar en manos del mercado la única lógica de la cadena. Porque actualmente la **sociedad** está en el medio de múltiples discursos (economicistas, salubristas, publicitarios, etc.) donde el **mercado**, a través de los medios, tiene una voz dominante a la hora de marcar el consumo condicionando la demanda desde la oferta y la producción/distribución desde las relaciones de producción.

Para nuestra propuesta es una premisa que son los comensales (no el estado o el mercado) el principio y el fin de toda política alimentaria. Por eso sostenemos la idea **que todos los patrones de consumo deben cambiar**, el de los que no tienen (para que tengan derecho a una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada) y también el de los que tienen (porque su consumo los conduce a enfermedades crónicas y degenerativas dependientes del estilo de vida). Sostenemos también que la mejor política es la que favorece la autonomía de los comensales, es decir que tengan **suficientes ingresos para comprar sus alimentos y la suficiente educación para elegir responsablemente**.

Diagnóstico

Hasta hace muy poco la Argentina no presentaba problemas en la disponibilidad alimentaria (los alimentos producidos a los que se suma el stock del año anterior y las importaciones, pero a los que deben restarse las exportaciones y las pérdidas por semillas, procesamiento industrial y distribución), las Hojas de Balance (www.FAO.org/Argentina/HBA/2003) registran una disponibilidad de 3.100 kcal/persona/día como la media que estadísticamente le correspondería a cada Argentino. Más que los 2.700 kcal/p/día recomendados por FAO para una persona con gasto moderado. Pero el concepto de seguridad alimentaría no solo requiere que los alimentos producidos sean suficientes, también se requiere que su producción sea estable, (cosa que Argentina cumple) que sea sustentable y autónoma, estas son dos categorías a analizar en un diagnóstico tendiente a sugerir políticas porque la sustentabilidad de la producción agro-alimentaria argentina esta siendo cada vez mas cuestionada.

Respecto de la SUSTENTABILIDAD, el modelo agrícola actual de **agricultura extensiva**, que camina hacia el **monocultivo** de soja, **dependiente del petróleo** (mas por los agroquímicos que por los combustibles), **Concentrador-** (donde se promueve la desaparición de medianos y pequeños productores -que en Argentina son mucho mas grandes que en el resto del mundo- con la consiguiente desaparición de pueblos y migración rural-urbana, con el impacto demográfico y social consecuente). Los altos costos que demanda el paquete tecnológico asociado a la soja en su mayoría transgénica, han estimulado la **agricultura por contrato** en el que entran capitales financieros donde la inversión no se diferencia de cualquier otra inversión y la sustentabilidad no está contemplada, el desprecio por el medio ambiente aumenta en este tipo de agricultura sin agricultores donde el único fin es la ganancia.

El campo argentino nunca ha sido el polo tradicional que las representaciones culturales le asignan, al contrario ha demostrado una dinámica y modernización extraordinarias con desarrollos (siembra directa) originales para aumentar la productividad. Sin embargo la adopción de tecnologías agresivas, la contaminación de acuíferos son un ejemplo mas del desprecio por las consecuencias a largo plazo de la actividad en los otros.

Un problema que se avecina tiene que ver con la AUTONOMÍA. La Argentina fue durante el último siglo un país que producía casi todos los alimentos que consumía (excepto café y frutas tropicales). Pero la última transición dietaria enseña que a medida que aumentan los ingresos medios de las sociedades, la población tiende a consumir más productos animales (proteínas), relegando los cereales (hidratos de carbono). Para producirlos modifican su estructura productiva entrando en “la revolución forrajera” ya que para criar ganado que aporte proteínas necesitan inmovilizarlo en establos y alimentarlo en forma controlada, lo que implica, a su vez dedicar cultivos a producir forraje. La Argentina era un exportador privilegiado de carnes, criadas a pasto y agua, pero en la última década se ha vuelto la tercera exportadora mundial de forrajes (soja). El complejo sojero introdujo cambios en la estructura productiva deben ser evaluados en términos económicos y alimentarios. M. Teubal ha estudiado con precisión el complejo oleaginoso y su impacto no solo en cultivos estacionales (trigo y maíz que podrían recuperarse con relativa facilidad) sino en el avance de la soja sobre productos frutihortícolas y tambos que implican tanto inversiones importantes como tiempo (frutales). Si aún no estamos sintiendo la pérdida de autonomía tal vez se deba al desgraciado suceso que ha caído el consumo alimentario en cantidad y calidad cerca de un 30 % respecto a la última década.

Pero la pérdida de recursos por una explotación depredatoria no sólo se da en la tierra sino sobre todo en el mar, habida cuenta de los recientes sucesos con la merluza

Hubsi y el calamar. Pero hay que desconfiar también de la piscicultura , si la actividad no es científicamente controlada su impacto en el medio ambiente puede ser negativo como lo muestran los estragos ecológicos que realizan las empresas criadoras de salmón en Chile o de langostinos en India.

De manera que nuestro diagnóstico en el área de la disponibilidad advierte problemas incipientes que requieren su abordaje antes que sus consecuencias se manifiesten como crisis de sustentabilidad y autonomía en las próximas décadas. Sin embargo analizada a nivel global si bien presenta altibajos en el último cuarto de siglo, las oscilaciones que soporta no son mayores a un 15% (Gráfico N 1 del Anexo). En cambio la capacidad de compra, componente del acceso sufre enormes oscilaciones con caídas que llegan al 55% (respecto del año 1975 (que seleccionamos como base). Tales caídas -muy marcadas y de corto plazo- se dan en 1981, 1989 y 2002 .

Propuesta:

- Incidir activamente en la producción agroalimentaria . Identificando actores prioritarios para este momento y el futuro . Premiar a través de políticas activas la industria agroalimentaria que produzca alimentos saludables con procesos sustentables
- Realizar políticas crediticias activas hacia los pequeños y medianos productores de alimentos tanto para los que se apliquen a la producción para consumo interno (frutas y verduras, lácteos) como para diversificar las exportaciones priorizando aquellas de alto valor agregado y producción mano de obra intensiva y con alto aporte tecnológico (como es el caso de las frutas rojas que combinan desarrollos en laboratorios nacionales (micro-propagación) con mano de obra local, inversión en pequeña escala y excelentes precios internacionales) explotando en mercado gourmet que por sus dimensiones es más apto para los pequeños y medianos productores.
- Regular la producción alimentaria con criterio de sustentabilidad, incidiendo tanto en la producción agrícola para la protección de suelos y agua como en la pesquera para la protección de las especies.

La profundidad y el impacto del complejo sojero no puede obviarse, es necesario más estudio y propuestas conjuntas para enfrentar la situación.

La utilización de **transgénicos** parece imparable, se necesita una discusión amplia e informada sobre producción, su utilización y consecuencias indeseadas en el medio ambiente. Si observamos los escasos fondos dedicados en Argentina a la investigación en biología molecular podemos prever un futuro de dependencia de laboratorios extranjeros. Pero peor es el desbalance (mundial) entre la asignación de fondos entre biología molecular(+) y micropropagación(-), con lo cual debemos sospechar sobre la aplicación de los protocolos de seguridad biológica antes de sacar organismos transformados a campo abierto con los consiguientes riesgos.

Rol del mercado en la accesibilidad alimentaria: capacidad de compra

Precio de los alimentos

Si analizamos el precio relativo de los alimentos, observamos que en el último cuarto de siglo aumentan sistemáticamente. Esto es fácil de comprender en períodos inflacionarios, aunque en la Figura 2 podemos observar que también lo hicieron durante la convertibilidad. Comparando el precio de los alimentos y bebidas con el índice de precios al consumidor (IPC) de nivel general, observamos que el precio de los alimentos no dejó de crecer (aún los meses con deflación no lograron remontar la tendencia). El resultado ha sido que Argentina pasó de ser un país de alimentos baratos a ser un país de alimentos caros, con precios similares a los de Europa o Estados Unidos. Las curvas se juntan hacia diciembre de 2001 indicando una importante caída en el precio de los alimentos (por restricciones en la demanda) pero con posterioridad los precios de los alimentos aumentan exponencialmente (estuvieran o no atados a los precios de exportación), aún hoy día el aumento del precio de los alimentos sigue deteriorando la capacidad de compra del ciudadano medio.

Ingresos

Si observamos los avatares del ingreso medio en la República Argentina veremos que ha pasado de ser un país de ingresos medios a ser un país de ingresos bajos, y eso es particularmente importante donde la población es 90% urbana y accede a los alimentos a través de mecanismos de mercado. Pero no sólo descendió el ingreso medio sino que en la década de la convertibilidad la distribución del ingreso muestra una preocupante polarización (Tabla 1) aumentando la desigualdad.

Para empeorar las cosas, los perceptores de ingresos también son cada vez menos ya que desde hace una década ha aumentado significativamente tanto la desocupación abierta como la subocupación configurando una subutilización de fuerza de trabajo cercana al 35%

La pérdida de la empleabilidad durante la última década llegó a todos, empleados de larga data estables e inestables pero en especial a los más pobres y, dentro de los más pobres, especialmente a las mujeres, ya fueran jefas de hogar o trabajadoras secundarias (Gráfico N 3). Esto es doblemente importante para la seguridad alimentaria porque en un área urbana los alimentos se compran y sin empleo no hay ingresos y –además– porque son las mujeres con ingresos propios las que más aportan a la alimentación del hogar (Tabla 2). Entonces, más que la desocupación abierta a nivel general, la desocupación de los jefes de hogar es un indicador más sensible para la problemática alimentaria. Y un colorario directo derivado de este diagnóstico es que si se desea mejorar inmediatamente la alimentación del hogar hay que aumentar los ingresos femeninos (que se destinan principalmente a comida) en

cambio si se está pensando en elevar la calidad de vida (a mediano y largo plazo) entonces se puede operar en el ingreso masculino.

Una tentación simplista indica que si los ingresos caen y los precios de los alimentos suben, la pobreza no puede si no aumentar. Esta relación olvida a otro de los grandes actores en la seguridad alimentaria como es el estado que, a través de políticas públicas puede incidir en los precios de los alimentos, en el mercado de trabajo o compensar la caída de los ingresos.

Rol del estado en la accesibilidad alimentaria: políticas públicas

A pesar de que el Gasto Público social se mantuvo en un promedio del 20% del PBI y aunque el gasto publico social en alimentación es uno de los más progresivos, esta la inversión no alcanzó a compensar las caídas en la capacidad de compra y –respecto a la alimentación exclusivamente- el estado terminó actuando procíclicamente, es decir cuando hubo más repartió más y cuando hubo menos repartió menos sumado al aumento de los demandantes (gráfico N 4).

En Argentina hasta la ley 25724 no hubo una **política** alimentaria se llamaba así a los programas de asistencia alimentaria directa que se concentraban en los efectos y obviaban el análisis de las políticas económicas que afectaron indirectamente la alimentación al afectar la capacidad de compra. Algunas de las políticas económicas durante la Convertibilidad que incidieron en la seguridad alimentaria fueron por ejemplo la **competencia** y la **desregulación**. La primera afectó los precios de diferente forma: los productos más expuestos a la competencia externa (carne aviar) aumentaron sus precios muy por debajo de la media, mientras que los flex (frutas y hortalizas) crecieron pronunciadamente por encima, hasta que en la última etapa de la convertibilidad (1999-2001) aún estos se desploman por la caída de la demanda.

El tipo de cambio fijo tampoco resultó neutral para la seguridad alimentaria, ya que alentó la importación de alimentos, algunos de los cuales compitieron (algunas veces a precio de dumping) con los locales mejorando la capacidad de compra de la población al mismo tiempo que jaqueaban la agroindustria local incapaz de competir con productos de calidad y altamente subsidiados por sus países de origen. La desregulación que preveía que la eliminación de las retenciones y toda forma de control se reflejaría bajando los precios en el mercado interno, no resultó efectiva mas que en azúcar porque la mayoría de los productos desregulados aumentaron por encima del promedio inflacionario.

La política impositiva también afectó los precios de los alimentos al llevar la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 21% y eliminar los alimentos exentos que se limitaron solamente al pan de panadería de 12 unidades y la leche entera. El IVA se ha transformado en un puntal de la recaudación con un carácter marcadamente regresivo,

ya que este impuesto pesa proporcionalmente más en los consumidores más pobres, quienes dedican el mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de alimentos.

Las políticas de ingresos tampoco resultaron compensatorias. La desregulación del mercado de trabajo y la eliminación de los aportes patronales incidieron para que al fin del milenio el estado hubiera acompañado antes que compensado la caída de los ingresos de la población, aún reduciendo -hacia el 2001- el 13% de los ingresos de los jubilados y empleados públicos.

El salario social, fue un componente importante de la política de ingresos. El Gasto Público Social per cápita aumentó entre 1941 y 1986 a una tasa promedio de 2,7% anual, muy superior al promedio del producto bruto interno por habitante (1,1% anual). Pero, por los datos que existen, el Gasto Público durante la última década parece haberse mantenido en un porcentaje estable medido respecto del PBI, que fue extremadamente variable y registra crecimientos y caídas notables. Además a medida que crecía la pobreza, este gasto público debía repartirse entre mayor número de gente (Gráfico 5).

Por otro lado, durante la década del 90 al considerar al mercado el mejor redistribuidor el rol que se reservó al Estado fue garantizar el libre funcionamiento del mismo y compensar sus "fallas" asistiendo a aquellos que no pudieran integrarse al primer mundo. Esta visión condujo al redireccionamiento del Gasto Público. Antes que programas de cobertura universal que atacaran las causas de la pobreza, se propiciaron programas focalizados apuntados a compensar las "faltas" (en nuestro caso el consumo) de los que quedaban fuera del mercado. Se propició la transferencia hacia los privados de los servicios para la población que pudiera pagarlos, mientras el estado se reservaba la atención de los indigentes. Esta visión puede ser operativa cuando hay un 5 o 10% de pobreza concentrada, pero cuando la pobreza es masiva y creciente, los programas focalizados que atacan los efectos de la pobreza (pero no sus causas) son a todas luces ineficientes. Por otra parte, la insistencia en la ineficacia del estado como administrador de la asistencia propició una gestión tercerizada (cuya eficiencia también está en duda) con programas contratados directamente con ONGs (civiles y confesionales) y organismos internacionales (con sus propios objetivos, modalidades, técnicos y presupuestos -dependientes de la deuda externa) lo que contribuyó a que las orientaciones políticas quedaran fuera del control del estado, estalladas en miles de pequeños programas, necesariamente de alcance local, con objetivos propios, escasa financiación y menor coordinación.

Desde el punto de vista alimentario, entonces, tanto el mercado por la reducción de la capacidad de compra, como el estado por la contracción e ideología en la inversión del gasto público y la negativa para intervenir en el mercado, contribuyeron a hacer más restringido el acceso a la alimentación de un creciente contingente de personas.

En el AMBA la pobreza, medida por Línea de Pobreza (ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos y servicios) llega al 40% de las personas. (Gráfico N 5). Con tales datos contextuales sería esperable encontrar que la población más vulnerable, los niños que viven en familias bajo la línea de pobreza vieran comprometido su estado nutricional. Sin embargo aunque parezca paradójico, las encuestas antropométricas que realizó el Ministerio de Salud durante los años 1995 y 2002 en 18 provincias muestran que las cifras de deterioro nutricional permanecen estables, y se registra una cantidad estadísticamente normal de desnutridos agudos, una cantidad significativa de desnutridos crónicos - niños “acortados” que no han desarrollado su potencial de talla- y un número alarmante de niños con sobrepeso (Tabla n 3).

Estos datos advierten una vez más sobre la complejidad de que debe abordar una política alimentaria. Si durante los diez años de convertibilidad se verificó una crisis de acceso que afectó al menos al 40% de la población, cómo es posible que en lugar de encontrar desnutrición aguda registremos sobrepeso?. La respuesta es que los agregados sociales no son pasivos: los hogares desarrollaron estrategias domésticas que les permitieron moderar (aunque no superar) la crisis de acceso y desde el punto de vista analítico constituyen el nivel microsocial de la seguridad alimentaria y estas estrategias deben ser tomadas en cuenta porque -como en este caso- cambiaron el sentido de la escasez.

Propuesta

Si en el diagnóstico se concluye que el problema prioritario es de acceso urge mejorar los mecanismos de distribución del ingreso. Propuestas como el ingreso ciudadano cumplen esa función. El ingreso ciudadano en la niñez y en los adultos mayores (ICN-ICINA) serían acciones inmediatas con llegada directa a las poblaciones más vulnerables a la problemática alimentaria.

La modificación de la estructura tributaria en pos de una mayor progresividad sirve al mismo fin redistributivo. Además se propone aplicación de IVA diferenciales a alimentos preferenciales: bajando el IVA de aquellos que por sus características saludables se considera que la población debería consumir más (pescados, frutas y verduras), evitando con ello sufrimiento y enfermedad en el futuro (además de la pérdida de años productivos y costos de atención). Subiendo el IVA de aquellos que son peligrosos para la salud (alimentos basura, chatarra o no-alimentos) llenos de grasas trans, azúcares, colorantes y saborizantes de dudosa procedencia, ya que ellos redundarán en padecimiento y enfermedad para los individuos y gastos en su atención por el sistema de salud.

Premiar impositivamente las industrias que producen alimentos saludables con procesos no contaminantes y acordes a la protección del patrimonio cultural alimentario.

Revisar la comercialización frutihortícola en los mercados concentradores, donde siguen perdiendo los productores (sobre todo los pequeños y medianos) y enriqueciéndose los intermediarios mientras la población paga altos precios por los productos.

Revisar los Programas de Asistenciales favoreciendo los que contengan acciones a favor de la autonomía alimentaria familiar y recuperación del patrimonio alimentario. La ley 25.724 permite estas acciones sin necesidad de nuevos instrumentos.

Seguridad alimentaria: nivel microsocial

Diagnóstico

Las estrategias de los hogares dentro de sus restricciones de acceso pasaron por las siguientes prácticas

a) diversificación de las fuentes de ingresos (es decir recurren simultáneamente a los distintos mercados de trabajo urbano : formal e informal, aceptar pagos en monetario y en especies – aunque quien acepta cobrar en especies está más limitado a la hora de vertebrar una estrategia de consumo porque depende de los productos que quiera entregarle el empleador)- recurrir a la asistencia social alimentaria, a las redes de amigos vecinos y parientes para la circulación de mensajes, bienes y servicios desde los que tienen hacia los que no tienen, y en menor medida recurrir a la autoproducción (mas efectiva cuanto menos pobre la familia por las características ecológicas de los asentamientos).

b) diversificar los circuitos de abastecimiento recurriendo al mercado formal (donde la gran distribución encontró un nicho de mercado en la población pobre a la que ofreció una producción fabricada ad-hoc (con más grasas, más azúcares, más sal) con menor calidad, buena seguridad biológica, envasado en pequeñas cantidades y menores precios, que se ha dado en llamar “el mercado de los pobres”) y al mercado informal (vendedores ambulantes, locales multifunción, quintas, tambos habilitados, mataderos clandestinos, revendedores etc.) donde cambian precio por riesgo sanitario ya que su seguridad biológica es nula

c) manejo de la composición doméstica agrandando las familias en épocas de bonanza o cuando el flujo de ingresos fuera de los hijos a los padres y reduciéndola ante crisis o cuando el flujo de ingresos circula de los padres a los hijos. Desde 1993 el flujo de ingresos va de padres a hijos por lo que el tamaño familiar promedio en la pobreza comienza a reducirse de 6 integrantes a 5. Pero esto que de momento

aumenta los recursos actuales pone en peligro el sostén de los padres en el futuro en un país con gran desocupación alto empleo informal y sistemas jubilatorios precarios como el nuestro.

d) la última conducta fue la autoexplotación que consistió en trabajar más (cosa poco posible en un contexto de retracción del empleo) y comer menos, comer distinto y distribuir diferente dentro del hogar.

Para observar cómo se produjeron estas reducciones analizamos las representaciones culturales del consumo (que forman los principios de inclusión por los que operan, dentro del acceso, las elecciones alimentarias). Estamos buscando lo que da sentido al elegir qué comer.

Estas representaciones tienen que ver con los tres grandes principios de inclusión de los alimentos en nuestra cultura (ya que se piensa que el alimento nos cambia desde adentro): la idea del cuerpo ideal, la visión de las cualidades deseables en los alimentos y las características ideales que debe tener la comensalidad.

En los más pobres y en consonancia con las restricciones del acceso, la existencia de un ideal de cuerpo fuerte, alimentos rendidores (que al mismo tiempo sean baratos, den sensación de saciedad y gusten) y comensalidad extendida desde el hogar al grupo de pares (colectiva) condiciona el consumo de un tipo de alimentos (pan, papas, fideos, carnes grasas, azúcar, mate, limitadas frutas y verduras e inexistentes carnes blancas) organizados en “comida de olla” (guisos y sopas) sobre las que se construye un gusto de lo necesario para evitar siquiera desear lo que se considera imposible de obtener.

Entre los sectores de ingresos medios las representaciones cambian y el tipo deseable del cuerpo es lindo (flaco en el aspecto) al que se espera alimentar con productos ricos (azúcares y grasas) con una comensalidad familiar. Estos principios de inclusión son tan imposibles de cumplir que son los principales consumidores de dietas (de todo tipo).

El sector de ingresos altos en cambio busca un cuerpo sano (que en el aspecto es también flaco) al que debe idealmente alimentar con productos light en una comensalidad individual, donde cada uno se haga responsable de su salud futura, para lo que debe regular hoy su comida. El problema es que este sector señala las representaciones hegemónicas y crea los estilos de vida imitables para el resto de la población, imponiendo patrones de belleza delgados imposibles de lograr con el consumo limitado por el acceso de los más pobres quienes con ingresos magros y representaciones que los justifican construyen canastas de consumo llenas de hidratos de carbono, grasas y azúcares que los llevan a una obesidad de la escasez, dando

vuelta el sentido de los cuerpos de clase de los últimos siglos (donde la posición social era directamente proporcional al tamaño de la cintura).

Estas estrategias de consumo explican por que en la Argentina, según encuestas antropométricas, la desnutrición aguda es baja y la desnutrición crónica y el sobrepeso altos. Porque los más pobres alimentados con hidratos y grasas de guisos y sopas propias o de la asistencia social, esconden sus carencias (hierro, calcio, etc.) incluso bajo un tamaño corporal voluminoso (sobrepeso). Estas carencias se manifiestan en los niños como retardo de talla (desnutrición crónica) y enfermedades como la anemia (carencia de hierro).

Propuestas

Sin duda la mejor propuesta es que todos tengan suficientes ingresos para comprar lo que quieran comer y suficiente educación alimentaria para poder elegir.

Respecto a la ingesta de micronutrientes controlar la aplicación de las leyes de iodación (sal) y fortificación (de la leche, ley 25.459 y de la harina de trigo ley 25.630)-

Profundizar la aplicación de la ley 25.724* recordando que en asistencia social alimentaria: no hay soluciones simples a problemas complejos, la diversidad es necesaria de manera que habrá que superar modalidades únicas para situaciones diferentes (ya sean cajas, vales, comedores, tarjetas) buscando comensalidad familiar antes que institucionalización.

Fomentar la Autoproducción donde se pueda, no solo como producción frutihortícola para consumo, sino como patrimonio cultural, autonomía y autoestima.

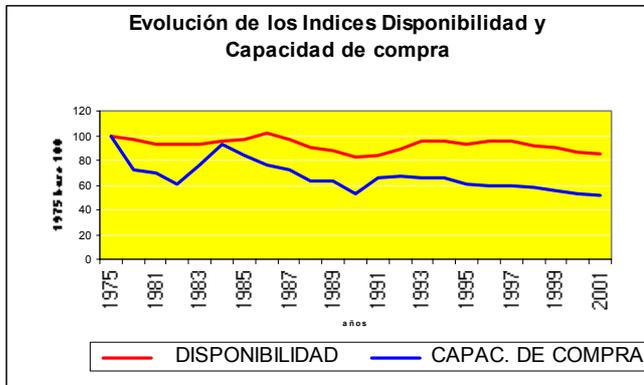
Educación alimentaria no prescriptiva, sino como una recuperación de los saberes femeninos acerca de la alimentación, como una oferta ética (del saber académico) para la construcción activa de saberes apropiados a la estrategia vital de cada hogar.

Regular la publicidad con criterio educativo controlando la oferta engañosa sobre todo en las publicidades de alimentos chatarra dirigidas a los niños (Las Normas de Autorregulación Europeas de la Publicidad Alimentaria en Infantes pueden servir como un modelo a discutir)

* Doctora en Antropología de la UBA. Profesional del Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud y Ambiente. Docente e investigadora del Instituto de Altos estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Representante de la Comisión Internacional de Antropología Alimentaria para Argentina. Ex consultora de UNICEF-FAO y OPS-OMS.

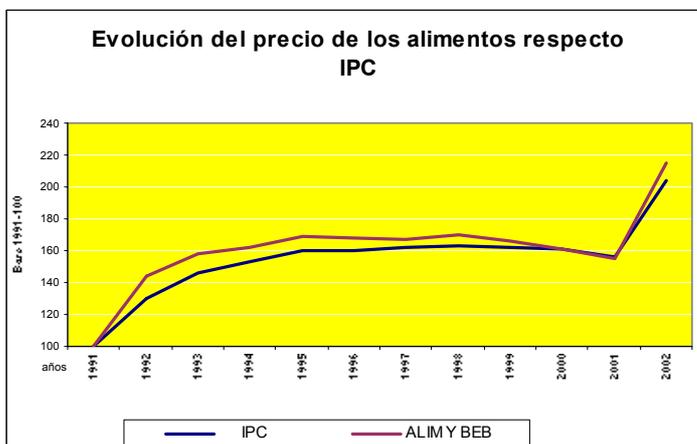
ANEXO

Gráfico 1



Fuente: elab.propia según datos de INDEC 1975-01

Gráfico 2



Fuente : elaboración propia en base a datos de IPC de INDEC 1991-2002.
Aguirre.P. 2005.Estrategias de Consumo. Que Comen los Argentinos que Comen. Miño y Dávila. Buenos Aires

Tabla1 Evolución de la distribución del ingreso familiar per capita. GBA en %.

	1980	1985	1989	1990	1995	2000	2001	2004
1	3.6	3.3	2.6	3.4	2.7	2,5	2,1	1.6
2	4.5	4.7	3.4	4.1	4.3	4,0	3,7	2,8
3	5.4	6.1	4.8	6.0	4.5	4,6	4,9	3,9
4	6.2	5.3	5.1	6.1	5.9	5,8	5,4	5,0
5	7.2	6.9	4.7	5.8	7.2	6,4	6,3	6,2
6	8.7	9.1	7.7	8.6	7.8	8,1	7,9	7,5
7	10.5	10.9	9.0	9.3	9.6	9,9	10,1	9,3
8	12.5	12.2	11.6	11.9	11.7	12,4	11,6	11,8
9	15.4	16.6	17.0	15.6	16.0	16,7	16,3	16,4
	25.9	25.0	34.2	29.0	30.3	29,7	31,8	35,6

Fuente: elab. propia en base a datos de la EPH del INDEC

Grafico 3

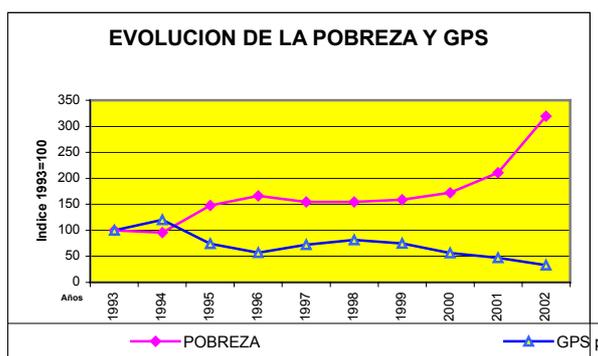


Tabla 2 Destino de los ingresos propios de mujeres y varones. En porcentajes

RUBRO de GASTOS	Mujeres	Varones
Alimentación	43,3	22,2
Indumentaria	2,1	1,3
Vivienda	4,4	17,4
Equipamiento del hogar	6,1	9,5
Salud	7,9	2,1
Transporte	19,3	16,6
Esparcimiento	2,2	6,2
Educación	3,9	2,1
Gastos personales	10,8	22,6
TOTAL	100,0	100,0

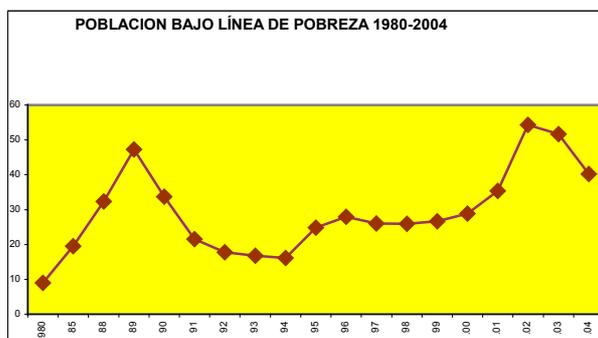
Fuente: Aguirre. P. 2005

Gráfico 4



Fuente: Aguirre. P.2005

Gráfico 5



Fuente: elab en base a INDEC 1980-2004

Tabla 3

Prevalencia de bajo peso/edad, baja talla/edad y bajo y alto peso/talla (± 2 desvíos estándar, referencia NCHS, todas las edades)

Indicador	2002	1995	Diferencia (test proporciones, 1 cola)
Peso/edad < -2 d.e.	4.70 %	4.82 %	$z=0.853, p=0.20$
Talla/edad < -2 d.e.	10.86 %	11.46 %	$z=2.887, p=0.002$
Peso/talla < -2 d.e.	2.19 %	2.59 %	$z=3.981, p=0.000$
Peso/talla > +2 d.e.	8.21 %	8.43 %	$z=1.206, p=0.114$

Fuente: Calvo E.Aguirre,P. Crisis de la Seguridad Alimentaria en la Argentina y Estado Nutricional en una Población Vulnerable. Archivos de la Sociedad Argentina de Pediatría Vol 103. N° 1. 2005